

Cuadernos del Sur

Número 17



Mayo de 1994

Tierra  fuego
del

alberto bonnet
eduardo glavich

El huevo y la serpiente

**Notas acerca de la crisis del régimen democrático de dominación y la
reestructuración capitalista en Argentina, 1983-1993
(Segunda Parte).**

Anotábamos, en la primera parte de este artículo, que la hipótesis que orienta nuestro análisis consiste en sostener la existencia de una estrecha relación entre el desarrollo y crisis del régimen democrático de dominación y los avances y estancamientos del proceso de reestructuración capitalista.

El menemismo, partiendo del desarme de la democracia logrado por el alfonsinismo, acelerará la reestructuración económica del capitalismo argentino y profundizará así la crisis del régimen de dominación política.

IV. 1989-1993: La dictadura del capital.

La amplia victoria de la fórmula Menem-Duhalde en las

elecciones de 1989, con un 46% de los votos contra un 36% para la de Angeloz-Casella, resulta claramente explicable debido a la coyuntura¹. La UCR combinó un perfil volcado a la derecha con la vieja matriz discursiva que contraponía "democracia" y "caos", asociados ahora con las figuras del modernizante gobernador de Córdoba y del populista caudillo de La Rioja, respectivamente. Este perfil apenas alcanzaría para sumar los temores propios de los sectores medios detrás de sus candidaturas. El PJ adoptó, por el contrario, un perfil nacionalista y populista (combinado con claros "guiños" a la gran burguesía² bastante inconsistente, aunque apropiado para la situación social vigente desde la hiperinflación de principios de 1989. Los programas y grandes actos estuvieron ausentes

durante la campaña. Tras lanzar variados desatinos, los asesores de Menem le prohibieron incluso discursar en público y participar en debates de televisión. Los grandes actos de la campaña de 1983 (800.000 personas en cierres de campaña, según cifras de DyN y oficiales) se redujeron a los pequeños actos barriales y los paseos del "menemóvil". El candidato peronista triunfó -en semejante contexto de desmovilización- sumando las esperanzas de mejores niveles de vida de los sectores más golpeados por la crisis mediante slogans como el "salariazó", la "revolución productiva", la "moratoria de la deuda". Apenas unos días más tarde, el nuevo gobierno inauguraba la política económica más reaccionaria de la historia argentina, con transformaciones estructurales que desmantelarían las conquistas sociales obtenidas por el movimiento obrero en los primeros gobiernos peronistas. "Si yo llegaba a decir en la campaña electoral todo lo que iba a hacer, la gente no me votaba", declaró Menem más tarde (citado en La Maga, 9-6-93). Indudablemente, este descomunal engaño a las masas que depositaron en Menem sus expectativas de progreso social constituye un verdadero atentado contra la democracia, aún entendida a la manera burguesa. Sin embargo, conviene volverse sobre algunos elementos previos. Hay datos que permiten conjeturar la existencia de negociaciones entre los grandes capitales monopolistas y los asesores de Menem en los tiempos de hiperin-

flación previas a la asunción del nuevo gobierno. Cavallo decía entonces: "ustedes no saben qué es la hiperinflación. Creen que la hiperinflación es como dicen Sourrouille o Alsogaray cuando la inflación pasa varios meses seguidos del 30%. No, la hiperinflación es otra cosa, totalmente distinta y ya la van a conocer" (en *Página 12*, 21/5/89). Y sugería rechazar los acuerdos de gobernabilidad con el alfonsinismo en retirada, para que el agravamiento de la crisis ampliara el consenso alrededor del nuevo gobierno para aplicar medidas recesivas. Los grandes capitales que originaron esas corridas cambiarias -y los "comunicadores sociales" que las siguieron e incluso anticiparon- tendrían una importancia central durante el menemismo.

En 1989 la economía presentaba un enorme déficit fiscal y una gran fuga de capitales: se requería -como diría Triaca para *El Cronista Comercial*- cortar de un sólo golpe todos los males de la crisis y comenzar la reconstrucción del capitalismo argentino".

Las designaciones de ministros y asesores, empero, fueron las primeras decisiones públicas que pondrían de manifiesto el rumbo adoptado por el menemismo. Menem escogería a Triaca, sindicalista plástico que había fundado la CGT-Azopardo para negociar con la dictadura, como ministro de trabajo. Sumaría además figuras extrapartidarias en puestos claves mediante un acuerdo con la UCeDé (A. Alsogaray

como asesor en temas de la deuda externa, M.J. Alsogaray como interventora de Entel). Y, especialmente, no seleccionaría como ministro de economía a un tecnócrata entre tecnócratas, sino a un empresario entre grandes empresarios. La oferta incluía a O. Vicente (Pérez Companc), C. Tramutola (Techint), F. Macri (SOCMA) y M. Roig (Bunge y Born), y la elección recayó sobre este último. Bunge y Born es uno de los mayores y más antiguos monopolios de la Argentina (Bunge y Born, Grafa, Molinos, Compañía Química, Atanor, Centenera) y un símbolo de los "vende-patria" para el peronismo tradicional. Nacido en la comercialización de granos y consolidado financieramente durante la dictadura en tanto uno de los mayores deudores y beneficiarios de la estatización de la deuda, favorecido además por alrededor de u\$s 1.000 millones anuales de promoción industrial con Grafa-San Luis y Grafalar-La Rioja y como contratista del Estado en la dictadura y el gobierno radical, se había convertido en un gigante multinacional de la agroindustria.

El hombre de Bunge y Born -reemplazado tras su muerte por su par Rapanelli- anunció en julio de 1989 un duro shock anti-inflacionario que contempló la devaluación del austral un 114%, la caída y liberación de las tasas de interés, la fijación de un tipo de cambio único, un congelamiento de precios acordado con 350 grandes empresas -que ni siquiera cumpliría Bunge y Born-, un

gran aumento de tarifas (de 200 a 650% en teléfonos, electricidad y gas) y de combustibles (un 600%), una suma fija no remunerativa y un adelanto en los sueldos públicos y pautas en los privados (*Clarín*, 10/7/89).

Este shock -"cirugía mayor sin anestesia", en términos del presidente- redujo la inflación a tasas (IPC, año base 1988) del 9,4% (Septiembre), 5,6% (Octubre) y 6,5% (Noviembre); aumentó en u\$s 1300 millones las reservas del BCRA y llevó las tasas de interés a un 10% mensual. El sector empresario aferrado a una economía proteccionista y semi-cerrada (y los trabajadores del sector público, principales afectados por la reducción del gasto público), sin embargo, expresarían sus resistencias al ajuste. Al ampliarse la brecha cambiaria, Rapanelli devaluó el austral, aumentó las tarifas de los servicios públicos y los aranceles de importación. Con una inflación prevista para diciembre del 40%, la reacción ante dichas medidas produjo la caída de Rapanelli y el ascenso de Erman González al Ministerio de Economía.

Erman González, democristiano y ex-ministro de economía de La Rioja, liberó los controles de cambio y los precios y paró el rebrote hiperinflacionario. Este ajuste, en extremo liberal-ortodoxo, sería reajustado varias veces para evitar nuevas corridas: canje de plazos fijos por Bonex del Erman II, aumentos de los impuestos a las exportaciones y del IVA (generalizado), recortes del

gasto público a partir de los salarios, suspensión de los pagos a los contratistas y de los beneficios del proteccionismo de los Erman III, IV y V, apertura del comercio exterior y blanqueo de capitales del Erman VI y sus correcciones del VII. Estas medidas reducen la inflación a un 6,2% para el último trimestre de 1990 y también el déficit fiscal, mediante una reducción del gasto del 61,7%, mientras que aumentaban a u\$s 8.200 el superavit.

Pero su carácter recesivo quedaría de manifiesto en la caída de un 0,5% del PBI (3,2% del PBI per cápita), de los salarios del sector público un 40% y de los industriales entre un 15 y un 20%, y el aumento del desempleo y subempleo a un 15% de la población económicamente activa (PEA) sumados⁴.

Sin embargo, el dólar terminaría disparándose nuevamente en Enero de 1991, el austral perdería otro 50% de su valor y Cavallo -que había estatizado la deuda como funcionario de la dictadura, en 1982, y acompañaba desde el comienzo el ajuste menemista- asume como ministro. En marzo de 1991 anunció el Plan de Convertibilidad, que establecía legalmente la vigencia del patrón-dólar (comprometiéndose por ley a no emitir, para cubrir el déficit fiscal, sin respaldo en oro o en divisas extranjeras) y ponía en juego las reservas de u\$s 6.000 millones acumuladas por Erman⁵.

Los sucesivos shocks anti-inflacionarios de los planes BB y Erman I-VII enfrentaron, desde el

comienzo, la resistencia de los sectores sociales más afectados por el ajuste. Los trabajadores públicos, golpeados por la caída del salario y los despidos, fueron el eje de la misma: las movilizaciones del 20/2/90 y del 21/3/90, con los empleados de Ferrocarriles y de SOMISA al frente, las huelgas de docentes y judiciales y la "Plaza del No" son algunos ejemplos. Esta resistencia de los trabajadores, sin embargo, retrocedería más tarde con la implementación del plan de convertibilidad de Cavallo, que sería apoyado monolíticamente por la burguesía.

El plan Cavallo reduciría sensiblemente la inflación del 27% de marzo, con índices mensuales decrecientes desde un 5,5% para abril hasta un 0,6% para Diciembre, y las tasas de interés caerían al 3% mensual. Se garantizaba al mismo tiempo un recorte presupuestario del orden de los u\$s 6.000 millones mediante la reducción de los empleados públicos (cesanteados o "voluntariamente retirados", 70.000 menos en los primeros seis meses de Cavallo, y se proyectaba llevar a 130.000 esta cifra para mediados de 1992). Las elecciones de legisladores y gobernadores de septiembre de 1991 se realizarían con la economía estabilizada a corto plazo (y con algunos indicios de recuperación): parecía exorcizado el temido fantasma de la hiperinflación y el PJ volvería a imponerse⁶. Después de dos años y medio de sobrevivir en una economía situada permanente-

mente al borde de un colapso hiperinflacionario, los trabajadores apoyaban con su voto a quienes parecían reestabilizarla.

En 1992 continuaba la reducción de la inflación (un 17,5% anual -IPC, base 1988-) con índices de 3% para Enero a 0,3% para Diciembre y se recuperaba el PBI un 8,7%. La estabilidad continuaría hasta el 0% de inflación de Agosto de 1993. El gobierno, eufórico con estos promocionados índices, lanza la campaña electoral para las legislativas del 3 de Octubre con la consigna "vote para adelante" (que atrás quedaría la hiperinflación). Los resultados marcaron un nuevo retroceso del radicalismo y un triunfo por amplio margen del menemismo tras 4 años de gestión, sin enfrentar alternativa alguna y conformando un mapa político sin precedentes⁷.

Pero la especificidad del menemismo no radica en la implementación de severos shocks anti-inflacionarios. La misma consolidación de estos shocks exigía encarar veloz y radicalmente la transformación de algunas piezas claves del capitalismo argentino en crisis, piezas que los economistas burgueses consideran como las fuentes de los desequilibrios inflacionarios: las empresas del estado, las diversas formas de proteccionismo y las conquistas sociales. Pero, si bien encarar estas transformaciones resulta urgente en el marco del plan Cavallo -pues su continuidad depende directamente del superavit-, habían sido anticipadas

desde el comienzo.

Dos leyes (las de Emergencia Económica y Reforma del Estado, elaboradas con la participación de R. Dromi del MOSP) fueron anunciadas por Roig y sancionadas por el Congreso -con el apoyo de los radicales- apenas unas semanas después de su asunción como ministro (Clarín, 10-7-89). Las leyes apuntaban centralmente a reducir el déficit fiscal, evitando el pago de los sobrepuestos fijados por los contratistas y proveedores del Estado (cerca de u\$s 2.000 millones), de las reparaciones emergentes de juicios contra el Estado -incluidas las deudas previsionales- y de subsidios enmarcados en los regímenes de promoción industrial (unos u\$s 4.000 millones). Las empresas públicas fueron intervenidas por 180 días y se encomendó a sus autoridades la tarea de reestructurarlas (rescindir contratos, despedir personal) y privatizarlas. Un acelerado proceso de privatizaciones se inició desde entonces. Ya en 1990 se había dispuesto la privatización de la telefónica ENTel, Aerolíneas Argentinas y varias empresas dirigidas por el Ministerio de Defensa, y se habían concedido derechos de explotación de áreas petroleras antes reservadas a YPF. A estas empresas se agregarán luego las de líneas marítimas (ELMA), correos y telégrafos (ENCoTel), carbón (YCF), agua (OSN), transportes subterráneos (SBA), electricidad (SEGBA, AyE e Hidronor), Gas del Estado y la

metalúrgica SOMISA. Serán entregadas al sector privado, además, las líneas ferroviarias y rutas nacionales. Se reestructurará y privatizará, finalmente, la mayor empresa pública, la petrolera YPF.

Estas privatizaciones apuntaban a la reducción del déficit fiscal y, supuestamente, al aumento de la tasa de inversión y de la eficiencia en las empresas privatizadas. Las funciones del Estado se reducirían a las esenciales: salud, educación, justicia y seguridad -aunque más tarde también éstas serían consideradas como no esenciales. Naturalmente -y en especial con Cavallo- los ingresos obtenidos por estas privatizaciones tendieron a reducir a corto plazo el déficit fiscal. Pero los otros dos objetivos quedarían relegados a la mera propaganda conservadora. Aerolíneas Argentinas es un buen ejemplo: un año y medio después de su privatización (hecha violando las condiciones de los pliegos), el Estado debió recuperar el 33% de las acciones porque la empresa a cargo (Iberia) pagó sus deudas por u\$s 166,7 millones con acciones sobre un activo que, milagrosamente, había caído de los u\$s 885,6 millones iniciales a unos 290 y convivía con un nuevo pasivo de 890 millones. En realidad, estas privatizaciones eran un fraude de antemano. YPF se vendió a \$ 19 por acción y el precio de mercado era de \$ 21,5: la diferencia arroja una pérdida de unos u\$s 420 millones en la venta. Tres meses después, los compradores habían obtenido ya un 38% de ganancia (Clarín, 2/7 y 6/10/

93). Otro objetivo de las privatizaciones, menos publicitado por los ideólogos conservadores, era capitalizar porciones de la deuda externa mediante los pagos en títulos. La reducción de deuda implicada solamente en las dos grandes privatizaciones de Erman (ENTel y Aerolíneas) alcanzó la suma récord de u\$s 6.500 millones. El gobierno había firmado con el FMI, el Banco Mundial y el Club de París, desde fines de 1989, acuerdos en los que había contraído compromisos que cumpliría en buena medida mediante esta política de reforma del Estado. Ahora bien, si consideramos la importantísima participación que los grandes capitales monopolistas **locales** tuvieron en las privatizaciones (Pérez Companc ostentó el título de mayor comprador), éstas resultan muy paradójicas: esos grandes capitales, que se consolidaron financieramente aumentando la deuda externa con Martínez de Hoz y más tarde transfiriéndola al Estado con Cavallo, comprarían títulos de aquella deuda para adquirir las empresas del Estado -cuya privatización reclamaban desde los tiempos de Videla.

Una tercera ley (de Reforma Tributaria) fue aprobada a fines de 1990. La estructura tributaria emergente de ella era aún más regresiva que la anterior, porque sustentaba el aumento de la presión tributaria (hasta un 21% del producto para la primera mitad de 1991) en el IVA -impuesto indirecto aumentado y generalizado- y en las cargas de

Seguridad Social (además de intensificarse la fiscalización). En 1985/86 los impuestos directos (ganancias y patrimonio) representaban el 10% de la recaudación del Estado nacional, los indirectos el 50%, las cargas sociales sobre los salarios el 25%, y los impuestos al comercio exterior el 15%. En 1991/92, en cambio, los impuestos directos mantenían su 10%, pero los indirectos habían aumentado al 55% y las cargas sociales al 30%, cayendo los impuestos al comercio exterior a un 5% del total.

Finalmente, un amplio conjunto de medidas apuntaba a la "desregulación" y "apertura" de importantes sectores de la economía. Una Ley de Inversiones Extranjeras facilitaría la radicación de capitales foráneos y la remisión de utilidades. Un Decreto de Desregulación Económica y otras medidas anexas dejaría librados a la oferta y la demanda el comercio interno y externo, el mercado de capitales, la seguridad social y los contratos laborales. Para completar el panorama, una "Ley de Flexibilización Laboral" y otra "Ley de Reforma Previsional" revertirían históricas conquistas del movimiento obrero: la jornada de 8 horas y 38 semanales, los descansos de Domingo y Sábado inglés, las indemnizaciones, el 82% y las edades para jubilarse, en vistas de la denominada "reducción del costo argentino".

La ley de "Flexibilización Laboral" está en discusión previa a

su ingreso al Congreso. La negociación tripartita (Caro Figueroa -ministro de trabajo y "flexibilizador" en España- representantes de los empresarios y de la burocracia sindical) apunta a la reducción del costo laboral con vistas a la competitividad: un motivo que remite a la doctrina de los "neoclásicos", pues los empresarios argumentan que los trabajadores argentinos están explotando con su salario a otros sectores de la sociedad, al cobrar por encima de la productividad, y este hecho no les permite competir en el mercado mundial ni aún en un mercado interno parcialmente desregulado. Por esta razón, el representante de la UIA declaró sin mediaciones a *La Nación*: "o flexibilizamos legalmente, o bajamos salarios y condiciones de trabajo".

La burocracia sindical acusó recibo del mandato patronal y negocia a cambio las obras sociales y otras prebendas con el argumento de que se ha modernizado y está a favor de una reestructuración que permitirá el ingreso de Argentina al cada vez más competitivo mercado mundial creando empleos y mejorando el nivel de vida de los trabajadores.

A pesar de la entrega de la burocracia, recientemente los trabajadores de SEVEL pararon y ocuparon una de sus plantas, pasando por encima y exigiendo la renuncia de su comisión interna, para reclamar aumentos salariales proporcionales a los incrementos de la productividad alcanzados. Pocos días más tarde, unos 10.000 trabajadores de SMATA

realizaron una marcha por aumentos salariales y contra la flexibilización laboral -protagonizando la mayor movilización obrera desde la asunción del menemismo y abriendo nuevas perspectivas de lucha en el seno mismo de uno de los sectores más dinámicos de la industria argentina.

La ley de "Previsión Social", ya aprobada por el Congreso y actualmente en aplicación, constituye una expropiación sin precedentes contra los trabajadores. Las "Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones" (AFJP) son -como dice la ley 24.241- "empresas cuyo objetivo principal es administrar un fondo constituido por los aportes de los afiliados que optaron por el régimen de capitalización (privado)". Este "servicio de administración" asegura a las AFJP una comisión de por lo menos un 2,5% del sueldo de los trabajadores, con lo que para estos "servidores" se abrió un negocio de unos 350 millones de dólares de comisiones para el primer año de implementación del sistema. El restante 8,5% del 11% total del aporte es la llamada "capitalización individual" que se asegura la AFJP para poder invertir en acciones, títulos, etc., con lo que el futuro de esos fondos estará sujeto a los vaivenes del mercado financiero.

Menem decretó la eliminación de la garantía en dólares -que establecía el artículo 40 de la ley- de la AFJP del Banco Nación (que también entró en el negocio) y por otro lado hace campaña para que los

trabajadores se afilien al sistema privado, demostrando su apoyo incondicional a esta estafa. Las razones son sencillas. Las AFJP, integradas por los bancos privados y públicos y las compañías de seguros, calculan que con sólo el 35% de las potenciales afiliaciones el negocio es incomparable: el 2,5% mínimo de comisión es un beneficio varias veces millonario que va directamente a la caja privada de las AFJP. El 8,5% restante iría al mercado financiero produciendo -como aseguran que ocurrió en Chile- un inmenso movimiento de capitales capaz, por sí mismo, de dinamizar dicho mercado. Como era previsible, la burocracia sindical no podía quedar afuera de este negocio y no sólo participa en la privatización de empresas sino que integra algunas AFJP y convoca con solicitadas a los trabajadores de su sector a afiliarse a la jubilación privada.

Pero no todo es fiesta en el negocio. Al bajo número de afiliaciones registradas hasta el presente -pese a los 1.000 millones de dólares invertidos en publicidad- se agrega una "crisis interna" por la renuncia de tres funcionarios de la llamada "Superintendencia de AFJP", que consideran que dicho ente de regulación y control no regula ni controla el accionar de las AFJP.

Mediante esta serie de iniciativas el menemismo retoma, desde el comienzo y con una intensidad sin precedentes, el proceso de reestructuración del capitalismo argentino. Pero ¿cuáles son las

razones que explican esta política? La crisis había venido profundizándose desde la caída de la dictadura, y el gobierno menemista enfrenta en 1989 una situación más crítica que la enfrentada por el alfonsinismo en 1984. Las decisiones debían ser radicales. La lentitud del gobierno alfonsinista para encarar las transformaciones propias del proceso de reestructuración capitalista había determinado su fracaso y esta experiencia gravitó sobre las decisiones iniciales del nuevo gobierno.

El peronismo de 1989 -por más paradójico que resulte- parece adecuarse como estructura política a los imperativos de la reestructuración. La combinación entre su verticalismo tradicional -que permite subordinar a los distintos sectores de la "rama política" y, en particular, a buena parte de la burocracia sindical- y su descomposición interna desde los tiempos de la muerte de Perón y el golpe del 76, explican la gestación interna del neoconservadurismo menemista y su control casi monolítico del partido¹⁰.

Sin embargo, estas y otras respuestas semejantes apenas pueden aspirar a una explicación parcial del menemismo. La pregunta que queda pendiente es la central: ¿por qué logró el menemismo imponer, paulatinamente, medidas centrales de una reestructuración capitalista que es la ofensiva contra los trabajadores más profunda de nuestra historia? Y esta pregunta nos remite directamente a los factores políticos e ideológicos

que intervienen articulando la reestructuración capitalista con el desarrollo del régimen democrático de dominación.

La política del menemismo se caracteriza por sus rasgos autoritarios cada vez más marcados, rasgos que profundizan la crisis del régimen democrático manifiesta en los últimos años del alfonsinismo. La primera decisión que señalaría el rumbo autoritario del nuevo gobierno es el indulto para los militares responsables de la represión, las Malvinas y las sublevaciones de Semana Santa, Monte Caseros y V. Martelli. Este indulto -consensuado antes de su asunción con la UCR, la UCeDé, los militares y la Iglesia- profundizaría el Punto Final y la Obediencia Debida dictadas por Alfonsín, liberando a los 277 militares (junto con algunos presos políticos) que aún quedaban y alcanzando así la "pacificación" completa del país (*La Nación*, 8/10/89).

Además, el menemismo desarrolla una modalidad caudillista y autoritaria de hegemonía que se manifiesta paulatinamente en diversas situaciones¹¹. Las relaciones que el Ejecutivo establece con los poderes restantes (Legislativo y Judicial) y con los gobiernos provinciales son buenos ejemplos. Menem tomó importantes decisiones mediante un número desmesurado de "decretos de necesidad y urgencia" (244, contra 25 dictados entre 1853 y 1989, según cifras del CEPPA - *Clarín*, 13-9-93), en su mayoría relativos al proceso de

reestructuración (sobre impuestos, salarios, deuda pública) y nunca ratificados por el Congreso. Esta desvalorización del Poder Legislativo -del que el PJ, sin embargo, controla la primera minoría- culmina con las propuestas de los asesores de Menem apuntando a la clausura del Congreso. Sus relaciones con el Poder Judicial no son muy diferentes. El gobierno aumenta los miembros de la Suprema Corte como una de sus primeras decisiones y nombra 4 nuevos jueces oficialistas, suficientes para mantenerla bajo su control. Escándalos posteriores (los casos de Servini de Cubría por el "narcogate" y de Belluscio y Petracchi por los pagos del BCRA son apenas los más resonantes) desnudarían otras presiones sobre el poder judicial. Las intervenciones a los gobiernos provinciales (Corrientes, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero) y las extorsiones (vía coparticipación, Pacto Fiscal, etc.) que apuntan a llevar la reestructuración a las provincias completan este panorama. Deben incluirse aquí, además, las presiones sobre el periodismo (casos de López Echagüe y otros).

La corrupción generalizada entre los miembros del equipo menemista también debe inscribirse en el contexto de esta modalidad autoritaria de construcción de una hegemonía. En efecto, la corrupción no constituye propiamente un problema moral o jurídico, sino un instrumento de cohesión interna del gobierno alrededor de su política de reestructuración capitalista¹². Un buen

ejemplo es el "affaire Enron": la intervención del embajador yankee en favor de la empresa Enron y contra Pérez Companc. T. Todman presiona a Erman González para acelerar la realización de una separadora de gases en Neuquén, atribuida a la Enron mediante un decreto de Granillo Ocampo de comienzos de 1990 y suspendida un año más tarde por las presiones de Pérez Companc. Recientemente, el caso más significativo es la presión, ya no sólo del actual embajador J. Cheek sino del vicepresidente A. Gore y del mismo Clinton, para que la Argentina apruebe una "ley de propiedad intelectual" (específicamente, para medicamentos) bajo pena de no ingresar al NAFTA y de barreras para-arancelarias para productos argentinos en EEUU. El vínculo entre estos mecanismos corruptos y la política reestructuradora del menemismo es evidente. Cinco ministros ya fueron acusados de corrupción y figuran entre ellos los principales responsables de las privatizaciones: Dromi del MOSP (peajes, pliegos de Aerolíneas Argentinas, Compañía Naviera Paraná) y Triaca de Trabajo (SOMISA), además de las interventoras Alsogaray (por ENTel) y Menéndez (por el PAMI), el intendente Grosso (Golf, escuela-shopping y velódromo) y muchos otros.

El autoritarismo, finalmente, queda de manifiesto en las respuestas del gobierno a varios casos de resistencia a su política neoconserva-

dora. La lucha de los trabajadores del sector público durante los planes BB y Erman tuvieron que enfrentar la restricción legal del derecho de huelga y la presión sobre la burocracia sindical. Las movilizaciones de los jubilados, más tarde, serían reprimidas por la policía.

La represión a los protagonistas del "santiagazo", a los docentes salteños, a los manifestantes jujeños (y detención de su principal dirigente, Santillán), muestra que la respuesta inmediata -entre las mediatas- se encuentran medidas asistencialistas del gobierno a la resistencia de los trabajadores consiste en intervenciones directas y violentas. Recientes iniciativas de Menem apuntando a crear una "super- secretaría de seguridad" directamente dependiente del Poder Ejecutivo y a implementar una fuerza de élite de 3.000 hombres, equipados con modernos armamentos para "intervenir de forma inmediata, desbaratar o reprimir disturbios de diferente intensidad, que alteren el orden público produciendo desmanes o atentados" o enfrentar la "desestabilización gubernativa en ciudades de importancia o provincias" (*Clarín*, 15/5/94) confirman este diagnóstico.

Los rasgos autoritarios del menemismo responden a causas precisas. Por un lado, las transformaciones inherentes a la reestructuración son tan profundas y acarrear consecuencias sociales tan graves que requieren una muy sólida hegemonía política. Esta hegemonía difícilmente pueda construirse de una

manera democrático-burguesa más o menos "pura" en una sociedad como la nuestra -y los fracasos de la burguesía argentina en la materia, que condujeron en otros casos al empleo directo de las Fuerzas Armadas, testimonian esta dificultad. Antes debería sorprendernos la capacidad del menemismo para implementar su política conservando la vigencia de algunos mecanismos democrático-burgueses que sus rasgos autoritarios. Por otro lado, desde la crisis del alfonsinismo, los grandes capitales monopolistas se hicieron cargo de una manera cada vez más directa de implementar la reestructuración. Esto elimina mediaciones políticas, acota notoriamente los márgenes del consenso democrático-burgués y convierte a la política en un mero instrumento ejecutivo del gran capital. Instaure una suerte de dictadura del capital. Esta despolitización de la política es encuadrada por una ideología pragmatista característica del neoconservadurismo que presenta los intereses del gran capital como necesidades objetivas.

V. 1994: Profundización de la crisis.

La política autoritaria y la ideología pragmatista del menemismo -determinadas por el proceso de reestructuración capitalista- acarrear serias consecuencias para el régimen democrático de dominación. La crisis

de este régimen, abierta ya en tiempos del alfonsinismo, se profundiza paulatinamente desde entonces hasta fines de 1993. Sin embargo, hacia fines de 1993, dos acontecimientos muestran una profundización sin precedentes en esta crisis: el contubernio radical-peronista perpetrado en noviembre por arriba y la insurrección que los santiagueños protagonizaron en diciembre por abajo.

La crisis del régimen democrático arrastra consigo, necesariamente, a los partidos políticos burgueses que no están a cargo del poder ejecutivo. El primer caso fue el de la UCeDé. La UCeDé, que había crecido aceleradamente hasta ubicarse en 1987 como tercera fuerza a nivel nacional, hace una alianza con el gobierno menemista y empieza a retroceder en las votaciones posteriores. Las elecciones de junio de 1992 para senador capitalino ponen en desnudo su crisis: Porto (PJ-UCeDé) es derrotado por De La Rúa. En la UCeDé convivían dos proyectos, y se jugaron en esas elecciones: Alsogaray defendía una UCeDé que fuera "grupo de presión" y declararía satisfecho que la misma "se fagocitó al peronismo" porque "el gobierno privatiza y desregula los mercados, tal como lo venimos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo". Clérici en cambio proyectaba una UCeDé que fuera verdadero "partido de derecha" y subrayaba que: "el apoyo a algunas políticas del gobierno no podía significar obsecuencia o

desaparición política" (Página 12, 30-6-92). La "estrategia de fagocitación" de Alsogaray -que aplicara anteriormente en las dictaduras- prevaleció y la UCeDé comenzó a desaparecer como expresión política hasta alcanzar apenas un 3% de los votos durante la última elección. El segundo caso -mucho más relevante, porque afecta a uno de los dos pilares del bipartidismo argentino- es el de la UCR. La UCR, incluidos todos sus sectores internos, carece completamente de una alternativa a la política reestructuradora del menemismo.

Algunos sectores siguen enfrentando al menemismo sin nada que decir: Terragno -el "modernizador" alfonsinista de la "Argentina del Siglo XXI"- fracasa entonces en sus polémicas con Cavallo. Otros sectores preferían asumir como propia la política económica menemista y agregarle algunos aditamentos (necesidad de una "mayor prolijidad", de "ética", etc.): De La Rúa -que había vencido a Terragno en la UCR capitalina- declaraba a mediados de 1992 que "con un proyecto radical, o sea, libre de los conflictos de este gobierno y sin este marco de corrupción, Cavallo podría ser extraordinario". (Noticias, 29-3-92). La contundente derrota sufrida por De La Rúa en las elecciones de 1993 marcaría los límites de un oportunismo semejante.¹³ Angeloz -que aparece actualmente como el principal pre-candidato de la UCR para 1995- y sus asesores, Sthurzenegger y López Murphy, no pierden una sola oportunidad para

alabar las virtudes del plan Cavallo (y éste, recíprocamente, no duda de las virtudes técnicas del equipo económico de Angeloz). Esta ausencia de alternativa a la política menemista deriva de que, en el actual contexto de crisis y dentro del marco capitalista, cualquier alternativa se reduce necesariamente a ser una variante apenas matizada del programa desarrollado por Cavallo.

En este contexto debe analizarse el contubernio Menem-Alfonsín. La profunda crisis que atraviesan los principales partidos burgueses "de oposición" fortalece inmediatamente al menemismo, pero a la vez genera incertidumbre a mediano plazo respecto de las posibilidades de recambio político si fracasa el menemismo. El sistema de partidos (el mecanismo de relevos del bipartidismo) parece, entonces, resultar insuficiente a efectos de garantizar un marco de estabilidad política a la reestructuración capitalista -detrás de la que está alineada monolíticamente la gran burguesía. El propio contubernio de Olivos y la reforma de la constitución acordada (el ministro coordinador, el ballottage, los tres senadores por provincia, el sistema de nombramiento de la corte suprema son aquí tan importantes como la propia reelección presidencial) apuntan, justamente a generar nuevos recursos de estabilidad política para enmarcar la reestructuración. El apoyo fuerte y unánime brindado al contubernio por la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la

Asociación de Bancos de la República Argentina y otros representantes del capital basta para demostrarlo contundentemente (ver Clarín, 16/11/93).

Sin embargo, los resultados del plebiscito/acatamiento que organizó el gobierno menemista y el alfonsinismo para legitimar en las urnas su contubernio cuestionaron -al menos parcialmente- sus virtudes estabilizantes. Estos resultados convirtieron al contubernio, más bien, en un exponente por arriba de la crisis del régimen de dominación. Tras una campaña propagandística inédita, en la cual los candidatos radicales criticaban a sus compañeros de contubernio mientras los peronistas convocaban a votar a su partido o a los radicales, ambos partidos retrocedieron: apenas alcanzaron sumados el 60% de los votos emitidos -la cifra más baja desde 1983. Además, el contubernio resultó escasamente reeditable para cada uno individualmente considerado. La UCR fue la gran perdedora: retrocedió desde su ya reducido 30% de 1993 a apenas un 20% -su peor elección de 1983 a la fecha, al punto de perder más de un millón de votos. La magnitud de esta derrota produjo una serie de enfrentamientos entre sectores internos aún no superados. El PJ, aunque logró una nueva victoria, retrocedió del 42% de 1993 a cerca de un 39% -perdiendo otro millón de votos- y no alcanzó a obtener la mayoría de constituyentes que esperaba. La dispersión del voto

favoreció principalmente a fuerzas que aparecieron como opositoras de centro-izquierda (el Frente Grande, con casi 14% y su victoria en Capital Federal, y la Unidad Socialista con un 3%) y como opositoras de derecha (el MODIN, con un 9%, y algunos partidos provinciales). Es cierto que ninguna de estas fuerzas representa una amenaza para la estabilidad del régimen: las declaraciones de Chacho Alvarez apoyando las privatizaciones y el plan económico -y recibidas con agrado en la city- eliminan dudas al respecto (ver Clarín y Ámbito Financiero del 11/4/94). Pero es igualmente cierto que el plebiscito había sido organizado, simplemente, para legitimar en las urnas la reforma pactada en Olivos con una abrumadora mayoría radical-peronista.

Sin embargo, un aspecto importante de estos resultados, un aspecto que evidencia como ningún otro el aceleramiento en la crisis del régimen, no puede analizarse a partir de estos desplazamientos electorales. Dejemos su formulación a uno de los miembros prominentes del establishment, R. Alemann: "Entre la abstención, el voto en blanco y los nulos, hay un 35 o 36% que rechazó el tema de la reforma, mientras que los partidos del pacto sumaron apenas el 40%, lo cual demuestra que a la gente no le gustó el tema" (Clarín, 12/4/94). Alemann hace bien en preocuparse por este aspecto de los resultados, ya que sumando los votos del PJ y la UCR apenas llegan al 42% del total del padrón electoral.

La participación político-eleccionaria mermó continuamente durante la caída del alfonsinismo y el gobierno menemista. El voto en blanco aumentó de 1,41% en 1985 a 4,66% en 1991, cayó levemente en 1993 -aunque superando el 3,5% del padrón- y pasó nuevamente el 4,5% en 1994. Los votantes para presidente de 1983 eran el 81,27% del padrón y el 82,29% en 1989 declina abruptamente hasta un 75,35% en las constituyentes de 1994.¹⁴ Los votantes en las internas de 1993 apenas suman 1/3 de los empadronados en los partidos ("¿Dónde están los militantes?", artículo de R. Fraga en Clarín, 19/7/93). Las actividades de militancia política de los partidos burgueses se reducen a millonarias campañas publicitarias previas a las elecciones.

Aún los programas políticos de TV y radio, innumerables a mediados de los años 80, pierden rating y se convierten en "programas de actualidad general" (Hadad, Longobardi, Grondona) o simples shows (Neustadt, Gambini/Beldi). El crédito sufrido por los políticos tradicionales aumenta en las encuestas y los partidos burgueses tienden a legitimarse con mecanismos bastardos de representación, es decir, capitalizando una representatividad que proviene de actividades ajenas a la política. Las candidaturas extra-políticas del cantante Ortega para gobernador de Tucumán, del automovilista Reutemann para gobernador de Santa Fe, de la

escritora Mercader para diputada, son casos que preceden a las recientes negociaciones con varios miembros de la farándula.¹⁵

Sin embargo, la insurrección de los santiagueños de fines de 1993 puso en evidencia como ningún otro acontecimiento el aceleramiento alcanzado por la crisis del régimen democrático de dominación -y permite explicar, al menos parcialmente, las tendencias abstencionistas y votoblanquistas que preocupan a Alemann: aquellas cifras se elevaron en Santiago a casi 40% y 8%, respectivamente, de abstenciones y votos en blanco. El santiagazo no es un acontecimiento aislado: movilizaciones en La Rioja, Chaco y Jujuy lo precedieron y otras movilizaciones en Jujuy y Salta siguieron sus pasos. Pero el santiagazo fue, indudablemente, más profundo. Santiago del Estero está, junto a las otras nombradas, entre las provincias más empobrecidas del país. El avance de la reestructuración capitalista, vía Pacto Fiscal, sobre la provincia -y una de sus expresiones específicas: la "ley omnibus"- acarrea retrasos de varios meses en los pagos de sueldos, reducciones de los salarios, despidos de empleados públicos que nunca encontrarían empleo en el ámbito privado debido al empobrecimiento de la economía santiagueña. Esta avanzada reestructuradora estaba comandada, además, por una camarilla de dirigentes políticos corruptos y completamente irrepresentativos. Una marcha para reclamar la

derogación de la "ley omnibus", organizada por ATE, es convertida por los manifestantes entonces en una verdadera insurrección popular. Las fuerzas de seguridad son desbordadas, las sedes del poder (la casa de gobierno, la legislatura, el palacio de justicia) y más tarde las lujosas residencias de la camarilla dirigente son asaltadas e incendiadas.¹⁶

Las limitaciones objetivas y subjetivas del santiagazo son evidentes: se desarrolló en una provincia sin peso económico ni político, desindustrializada y despoblada por el éxodo de sus habitantes durante décadas y se encaminó hacia el asalto inmediato de las instituciones sin crear una nueva dirección ni cristalizar en alternativas duraderas de gobierno. Empero, el santiagazo -y las movilizaciones anteriores y posteriores en las provincias norteñas- puso de manifiesto la crisis del régimen de dominación y señaló, simbólicamente si se quiere, un camino de resistencia.

VI. Conclusiones: crisis y nuevas perspectivas.

Recordemos algunas ideas arriba esbozadas. Las condiciones del restablecimiento del régimen democrático se caracterizan por las transformaciones de la sociedad argentina que realiza la dictadura - particularmente, la consolidación de una gran burguesía monopolista mediante una profunda ofensiva

contra los trabajadores- y las luchas democráticas que acompañan el retiro de la dictadura en un marco de recesión y reconversión del capitalismo mundial. Estas dos condiciones determinan los rasgos del período alfonsinista. El alfonsinismo encauza el restablecimiento del régimen democrático dentro de límites burgueses, mediante una política e ideología abstractamente democratizantes desarma la democracia, pero al precio del estancamiento de la reestructuración capitalista y la profundización de la crisis. Esta tensión se supera hacia 1989: la gran burguesía toma las riendas de la situación (hiperinflación) y las mediaciones democrático-burguesas se disuelven (estado de sitio). Estas condiciones determinan, a su vez, los rasgos del período menemista. El alfonsinismo había madurado un huevo, ahora nacería la serpiente: el menemismo instaaura una dictadura del capital y acelera, a través de una política y una ideología pragmáticamente autoritarias, la reestructuración hasta el presente.

Pero la reestructuración capitalista es primaria y fundamentalmente una salvaje ofensiva burguesa contra los trabajadores ¿Qué rol desempeñaron estos últimos frente a aquella ofensiva?, ¿qué políticas deberían desarrollar?, ¿qué perspectivas de revertir esta relación de fuerzas los acompañan?

Las luchas de los trabajadores durante estos últimos

diez años fueron esencialmente defensivas y limitadas. Resistieron la ofensiva burguesa en sus aspectos coyunturales (las alzas inflacionarias que reducían sus salarios y los shocks anti-inflacionarios que descargaban sobre sus espaldas los costos de la estabilización), sin éxito a mediano plazo y casi sin enfrentarla en sus aspectos más profundos (las medidas de reestructuración propiamente dichas: legislación laboral y previsional, privatizaciones). Y aún estas luchas defensivas y limitadas menguaron sensiblemente -inflación controlada de por medio- con la implementación del plan de convertibilidad.

La derrota sufrida por los trabajadores en la dictadura resulta sin duda el factor explicativo más importante a largo plazo.¹⁷ Sin embargo, desde los tiempos de la represión hasta el presente pasaron unos quince años y nuevas generaciones de trabajadores se sumaron al mercado de trabajo y desarrollaron nuevas experiencias de lucha. Habida cuenta del incremento que alcanzaron sus luchas durante los años del alfonsinismo y el retroceso posterior, es necesario detenerse sobre algunos factores de más corto plazo.

En primer término, la burocracia sindical constituyó un importante obstáculo. En el período alfonsinista, esta burocracia subordinó el interés de clase de los trabajadores al del PJ, organizando burocráticamente (sin asambleas de base, discusión, etc.) paros generales

con reivindicaciones limitadas (los "26 puntos") y desarticulados respecto de planes de lucha de largo alcance. Desde el comienzo del período menemista, la CGT se dividiría en una oficialista (la CGT-San Martín de Triaca) y otra arrastrada hacia la oposición (la CGT-Azopardo de Ubal dini) por el peso que los sindicatos de trabajadores públicos -más golpeados- tenían dentro de la misma. Pero la CGT ubaldinista no realizaría tampoco una oposición consecuente, se mantendría "a media agua" y perdería peso junto a sus dirigentes. Puede decirse que, tendencialmente, la burocracia sindical deja de serlo, para convertirse en meros representantes del gobierno y de los patrones ante los trabajadores, o lisa y llanamente en patrones, y que la lucha de los trabajadores se desarrolla cada vez más al margen de esta ex-burocracia.

En segundo término, las agrupaciones de izquierda serían incapaces de constituirse en una dirección alternativa a la burocracia. El Partido Intransigente -tendencia de izquierda burguesa, nacionalista y populista- alcanzaría un crecimiento importante en la transición y primeros años del alfonsinismo (hasta llegar al 7% de los votos en 1985, constituyéndose en tercera fuerza) pero apoyaría las políticas oficiales (del plan Austral al de convertibilidad) perdiendo peso político hasta terminar siendo Alende, su líder, diputado electo del menemismo. La izquierda clasista - en particular el MAS y las alianzas

del mismo con el PC y grupos menores- experimentó más tarde un crecimiento social y electoral prometedor pero, a raíz de su incapacidad para caracterizar adecuadamente la situación política y trazar una estrategia revolucionaria coherente, comenzó a retroceder y un acelerado proceso de escisiones internas terminó barriéndola de la realidad.¹⁸ Esta izquierda política que -a pesar de sus limitaciones- alguna vez alcanzó a ofrecer una alternativa organizativa a sectores de vanguardia, en la actualidad quedó completamente al margen de la lucha de los trabajadores.

En 1975, los salarios representaban un 53,8% del PBI. En 1983 esta cifra había caído a un 41%, en 1990 a un 30% y en la actualidad apenas alcanzaría un 20%. El salario real de 1991 era 1/3 del salario de 1974. Los ingresos del 10% de los argentinos más ricos se incrementa de un 35% del PBI en 1974 a un 44% en 1980 y un 46% en 1990. Sobre una población total de 32,5 millones de habitantes hay 10 millones por debajo de la línea de la pobreza. La mitad de estos 10 millones de pobres son niños y 1 millón de niños sufre desnutrición.¹⁹ Estos son los saldos de la reestructuración del capitalismo argentino y las ilusiones depositadas en una reestructuración menos salvaje, más civilizada, resultan hoy objetivamente reaccionarias.²⁰ La izquierda socialista enfrenta una tarea urgente: impulsar y organizar la resistencia a todas y cada una de las medidas implementadas por el

régimen para aumentar la explotación de los trabajadores y demás oprimidos. Empero, las transformaciones operadas por la reestructuración hasta el presente son irreversibles dentro del marco del capitalismo argentino y de la recesión capitalista mundial. Y en este punto, la resistencia contra la reestructuración no puede orientarse hacia la reconstrucción del denominado "Estado Social", sino hacia la construcción del socialismo. La izquierda socialista debe analizar la reestructuración en curso para alcanzar una caracterización precisa de la etapa y encarar su tarea estratégica: superar las reivindicaciones defensivas y plantear una alternativa socialista a la crisis.

Las políticas neoconservadoras de reestructuración del capitalismo comienzan a enfrentar actualmente importantes resistencias sociales y políticas en Latinoamérica; y la continuidad de dichas políticas pelagra en los principales países de la región: el levantamiento campesino de Chiapas y el asesinato del candidato presidencial priísta desencadenó una profunda crisis política en México, la bancarrota del gobierno Collor-Franco y la posibilidad cada vez más firme de un gobierno petista en Brasil preocupan a la administración norteamericana por la estabilidad política de la región. Dentro de este contexto, empiezan a manifestarse en la Argentina nuevas tendencias de enfrentamiento a la reestructuración capitalista que plantean una nueva situación respecto de las relaciones de fuerza. Podrían

aislarse tres órdenes diferentes de enfrentamientos: 1) movilizaciones en el interior (La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca), enfrentando la marginalización de regiones y sectores enteros resultante del ajuste en las provincias. Son movilizaciones de los trabajadores públicos apoyadas por amplios grupos de la comunidad, que profundizan la lucha que los mismos vienen desarrollando -en ocasiones, aislados del resto de los trabajadores- desde el comienzo de la reestructuración capitalista; 2) nuevas expresiones de disconformidad de las denominadas "clases medias" urbanas, cada vez más empobrecidas en su mayoría por la política económica del gobierno. Son expresiones inorgánicas de una disconformidad que no cuestiona sino aspectos secundarios de la reestructuración capitalista (los resultados de las recientes elecciones de convencionales constituyentes conforman un mapa de las mismas, ya volcadas a izquierda o derecha), pero introducen fisuras en el apoyo acrítico que dichos sectores brindaron a las sucesivas administraciones; 3) nuevas huelgas y movilizaciones de los trabajadores de sectores privados claves en la producción (metalúrgicos de Bs.As. y recientemente los trabajadores de Tierra del Fuego), que vuelven a la escena por reivindicaciones -hasta ahora- económicas.

La consolidación y el desarrollo de estos órdenes de enfrentamiento a la reestructuración capitalista plantea nuevos y serios

desafíos. Desafíos de organización, pues una burocracia sindical convertida en empresariado, unos partidos de izquierda desintegrados y un agrupamiento decentro-izquierda electoralista y encerrado en las cuatro paredes de la superestructura política, son incapaces de ofrecer opción organizativa alguna. Además, desafíos de coordinación, pues los sectores sociales, los ritmos y las modalidades y aún los contenidos de las luchas desarrolladas son diferentes en los mencionados órdenes. Finalmente, estas nuevas tendencias de enfrentamiento imponen un desafío con respecto a su orientación política en una perspectiva anti-capitalista. Estos desafíos, que comienzan a plantearse en la presente coyuntura, adquirirán urgencia conforme dichas tendencias locales de enfrentamiento a la reestructuración capitalista (y sus pares latinoamericanas) se profundicen, y con ellas se profundice también la crisis del régimen de dominación política. Sería una ingenuidad suponer resueltos de antemano estos desafíos en dirección a una alternativa socialista.

La crisis del régimen democrático de dominación no tiene, per se, un carácter regresivo ni progresivo: dicho carácter depende justamente de la capacidad de la izquierda clasista de generar aquella alternativa socialista. Este desafío fue lanzado con la imagen de un hombre cualquiera, sentado en el sillón de un gobernador de provincia, blandiendo una suerte de bastón de

mando, y siendo aplaudido por una multitud de insurrectos.

Buenos Aires, Abril 1994

Notas

1. Los resultados de las elecciones de 1989 para pre-sidente fueron: PJ 47.36%; UCR 36,4% (apoyado por la CFI, que obtuvo el 4,55%); UCeDé 6,27%; Partidos provinciales 3,5%; IU (FRAL-MAS) 2,48% y US 1,31%. Para diputados fueron: PJ 45,7%; UCR 32,6%; Derecha y provinciales 11,8%; Izquierda y Centro-izquierda 6,7%. Menem ganó con el voto de los "sectores bajos estructurados" y "bajos no estructurados/ marginales" (52% y 72%, respectivamente, contra 34% y 20% para la UCR), mientras que la UCR ganó en "alto" y "medio alto" (48% y 53%, respectivamente, contra 23% y 27% para el PJ). La conformación de la cámara quedó con 120 bancas para el PJ (incluido el posterior grupo disidente de los 8), 90 para la UCR, 11 para la UCD, 2 para el PI, 31 para otros (incluidos los provinciales y 10 de izquierda y centro-izquierda). La polarización siguió disminuyendo afirmando la tendencia hacia la derecha que llegó a capitalizar el 72% de la dispersión del voto.

2. La campaña electoral había sido financiada por 23 empresas líderes, que gastaron un total de u\$s 12 millones. Muchas de ellas resultarían beneficiadas en las licitaciones de empresas públicas, como Bunge y Born (Gas Pampeana y Gas del Sur), Techint (Aceros Paraná, ex-Somisa), Astra, Sociedad Comercial del Plata (Telefónica Argentina, Aguas Argentinas), Benito Roggio e hijos (Clarín, 4 y 10/10/93). Los guiños del presidente resultaban creíbles para la gran burguesía. Por otro lado, Menem acordaría la transición con los "capitanes de la industria" (el "grupo María") en las oficinas de Bunge y Born: N. Rapanelli (BB), V. Orsi (SADE), S. Bagó (Lab. Bagó), M. Blaquier (Ledesma), R. Gruneisen (Astra), R. Bulgheroni (Bridas), R. Clutterback (Alpargatas) y M. Madanes (Fate-

Aluar) (El Cronista Comercial, 20-9-88).

3. Ver SMITH, W.C.: Estado, mercado y neoliberalismo en la Argentina de la postransición: el experimento de Menem, en El Cielo por Asalto Nro.5, Bs.As., 1993, p.61 y ss.

4. La Nación (15/4/90) calcula los resultados del ajuste en una caída del salario real en el sector público de 52% entre Diciembre del '88 y Marzo del '90, en maestros un 32% y en jubilados un 68%. La participación de los salarios del sector público en el PBI fue del 12% para 1987 y del 6% para 1990.

5. Ver ASTARITA, R.: Plan Cavallo y ciclo de acumulación capitalista, en Cuadernos del Sur Nro.16, Octubre de 1993.

6. Los resultados de las elecciones 1991 en diputados fueron: PJ 38,95%; UCR 27,42%; Derecha y provinciales 20,62%; Izquierda y Centro-izquierda 4,7%. El PJ pasaría a tener 118 diputados mientras que la UCR continuaría disminuyendo sus bancas hasta 84. El PJ gana además en 15 provincias, la UCR en 3 y los partidos provinciales en 5 (La Nación, 3/10/93).

7. Los resultados de las elecciones de 1993 fueron: PJ 42,3%; UCR 30%; Derecha y provinciales 20,1% (incluyendo al MODIN que con un 5,8% pasó de 4 a 7 bancas del 91 al 93); y la Izquierda y Centro-izquierda 4,1%. El PJ, con un amplio triunfo a nivel nacional con gran diferencia en Buenos Aires y con un histórico triunfo en Capital Federal, pasó a tener 126 bancas. La UCR decayó una vez más a 83.

8. Datos sobre privatizaciones y reforma impositiva de FANELLI, J.M./FRENKEL, R./ROZENWURCEL, G.: Transformación estructural, estabilización y reforma del Estado en la Argentina, Bs.As., CEDES/82, 1992.

9. Ver ZAMBONI, H.: Flexibilidad laboral: desandar la historia, en Cuadernos del Sur Nro.15, Abril de 1993.

10. Resulta esclarecedor, al respecto, el comentario que las designaciones de Menem merecían en un periódico del PJ: "en el área económica, es obvio que el Presidente ha hecho gala de un gran pragmatismo, el país, empobrecido y sin divisas, necesita buscar una convergencia de capitales y sectores de la producción, a fin de

poner en marcha la necesaria Revolución Productiva." Y más adelante: "se agrega a esto otro pilar fundamental, como es el pacto social, en el que los trabajadores, empresarios y Estado, tendrán que compatibilizar intereses sectoriales en función del bien común, no importa tanto quién es el ministro de Economía, lo importante es que haga buenos negocios para la Argentina". Fue el propio Perón, después de todo, quien dijo que, "a veces, hay que tragarse algunos sapos" (Proyecto Nacional Nro.1, del caudillo Quindimil). Esto pone de manifiesto la cohesión del PJ en torno del menemismo y que, aún personajes ex-montoneros como P.Bullrich, renovadores como J.L.Manzano y C.Grosso, desempeñen diversas funciones en el gobierno.

11. Nos referimos a una peculiar modalidad de conducción política, semejante a la de otros caudillos pertenecientes a los clanes familiares que controlan casi exclusivamente las provincias medianas y pequeñas (los Bravo de San Juan, los Sapag de Neuquén, los Saadi de Catamarca, los Rodríguez Saa de San Luis, los Cornejo de Salta, los Guzmán de Jujuy, los Romero de Corrientes, etc.). Menem desarrolla en el gobierno varias conductas típicas de estos caudillos provinciales (el nepotismo, por ejemplo, designando cerca de 20 miembros de su familia en funciones públicas). Pero esto no significa que su poder político como presidente sea excesivo, como lo muestran las sucesivas intervenciones de Cavallo (con peso propio y apoyado por la burguesía en su conjunto y los EEUU) en las internas del gobierno (Noticias, 3/5/92 y 29/3/93).

12. La idea de que la corrupción constituye una cuestión meramente moral o jurídica es masivamente compartida por los analistas políticos. M.Grondona (periodista autor de un best seller sobre el tema) declara que "eliminarla del todo sería imposible, pero se puede bajarla a niveles que permitan el funcionamiento del sistema" -cuando "el sistema" funciona precisamente gracias a la corrupción. Moreno Ocampo (Fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal -fraudes contra el Estado- y director de un programa para el control de la corrupción organizado por una agencia yankee) advierte en la misma línea que

"hay organismos internos del Poder Ejecutivo como la Auditoría General y la Sindicatura de Empresas Públicas que controlan los fondos y organismos externos como son los tribunales, además del control político que tiene que hacer el Congreso. Si estos controles funcionan tienen que detectar los casos de corrupción que existan" -mientras que la propia división de poderes resulta completamente disfuncional para la implementación de la política menemista (La Maga, 31/3/93 y Noticias, 30-6-91)

13. Como puede verse en la evolución del voto para diputados (y constituyentes de 1994):

	1983	1985	1987	1989	1991	1993	1994
UCR:	48.0%	43.6%	37.3%	33.1%	29.1%		
	30.0%	19.9%					
PJ :	38.6%	34.9%	42.9%				
	46.4%	40.4%	42.3%	37.6%			

14. La evolución del abstencionismo y del votoblanquismo puede verse en el siguiente cuadro: Porcentaje/año

	1983	1985	1987	1989	1991	1993	1994
Participación	81,27	80.95	82.54	82.29	78.05	76.60	75.35
Voto/ blanco	5,79	1,41	1,71	1,55	4,66	3,78	4,57

15. Riki Maravilla, precandidato por Salta, explicó su candidatura en términos claros: "no hay una cabeza visible, querible, dentro del justicialismo. No hay alguien que sea convocante y que el pueblo crea en esa persona. En Salta están un poco descreídos de los políticos que tanto han prometido y luego de las elecciones han hecho oídos sordos" (Noticias, 7-2-93).

16. Ver LUCITA.E.: Santiago: la Argentina oculta en Impreco para América Latina Nro.38, Enero de 1994. Ver, asimismo, el informe sobre la miseria imperante en Santiago del Estero y la crónica de la insurrección realizada por una periodista de Telefé, Fanny Mandelbaum, en La Maga, 5/1/94.

17. Los obreros industriales perderían peso en términos relativos y absolutos dentro de la sociedad (se redujo su número en un 40% entre 1974 y 1983). Los salarios reducirían en 12,8

puntos su participación en el PBI entre 1975 y 1983, iniciando una tendencia declinante sin retorno. Por otro lado, alrededor del 50% de las 7.261 personas desaparecidas desde 1976 hasta 1982, computadas en un informe de Enero del 83, eran obreros.

18. La evolución electoral de la izquierda clasista fue la siguiente, en cantidades de votos. En 1983: MAS 42.359 y PO 13.728. En 1985: FrePu (MAS-PC) 317.802 y PO 46.818. En 1987: MAS 227.326; FRAL 224.692 y PO 42.679. En 1989: IU (MAS-FRAL) 528.954 y PO: 36.060. En 1991: MAS 138.600, FRAL 86.525, PO 43.834. (La Nación, 14/5/89 y Prensa Obrera, 19/9/91). Tras un período de crecimiento entre 1985 y 1989, la izquierda obtiene un diputado nacional (L.Zamora del MAS), uno provincial (S.Díaz del MAS), y tres concejales. A este crecimiento electoral del período debe agregarse su influencia en algunos sectores del trabajo (UOCRA-Neuquén, Sanidad, Ferroviarios, Docentes, etc.).

19. Datos de la UNICEF. La reestructuración capitalista provoca también una "tercermundialización" de los países capitalistas centrales, en los que podemos apreciar un creciente desempleo (entre un 10 y un 15%), una mayor concentración de la riqueza (por ejemplo, el 1% de las familias norteamericanas tenía el 37% de la riqueza después de Reagan) y alrededor de 200 millones de personas sufren hambre (ver MANDEL.E.: Balance del neoliberalismo, en Dialéctica Nro.3/4, Bs.As., Octubre de 1993).

20. En este contexto, consignas como la de "capitalismo serio" o "capitalismo a la sucia" -defendiendo la necesidad del ajuste- de Chacho Alvarez son ilusiones que eliminan al Frente Grande como alternativa a la reestructuración menemista. Su carácter de clase se manifiesta claramente al votar junto a los pactistas la intervención contra la insurrección popular de Santiago del Estero.